

17/12/13

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION N°5 DE ESTEPONA

AVENIDA PUERTA DEL MAR, 45

Teléfono: 951891354/951891353. Fax: 951891356.

Procedimiento: DIL.PREVIAS 2081/2012. **Negociado:** AN

N.I.G.: 2905143P20120002461.

De: SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA (S.U.P), JOSE QUINTANA VIAR, JOSE MANUEL FRANCO PARDO, MARIA AMPARO VALCARCEL GARCIA y ROSA MARIA ALCALA CHACON

Procurador/a: PILAR TATO VELASCO, ROCIO TORRES MONTOYA

Letrado/a: FRANCISCO JAVIER CARNERERO PARRA, WILFREDO JURADO RODRIGUEZ

Contra: COAST INVESTORS LLC, LOURDES CAVERO MESTRE y JAIME IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ

Procurador/a: MAYOR MOYA LUIS y JOSE MARIA GARRIDO FRANQUELO

Letrado/a: JOSE MANUEL HIDALGO LOPEZ-PASTOR y ADOLFO PREGO DE OLIVER Y TOLIVAR

AUTO

En ESTEPONA a dieciseis de diciembre de dos mil trece.

HECHOS

PRIMERO.- Las presentes diligencias se incoaron por un supuesto delito contra la Hacienda Pública, habiéndose practicado diligencias y habiendo admitido la personación como acusación pública de Sindicato Unificado de Policía. Se tuvo por personada a la entidad COAST INVESTORS LLC, SUP y los diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid D. JOSÉ QUINTANA VIAR, D. JOSÉ MANUEL FRANCO PARDO, DOÑA MARÍA AMPARO VARCARCE GARCÍA y DOÑA ROSA MARÍA ALCALÁ CHACÓN. Se tomó declaración a testigos y acordado remitir Comisión Rogatoria a Londres, que fue devuelta sin cumplimentar ni traducir y a USA, que está siendo traducida para su remisión. Se presento en Fiscalía mediante comparecencia de D. ALBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ documentación donde se hacía referencia a unos hechos relacionados con la investigación y se volvieron a remitir las diligencias al Ministerio Fiscal a fin de que se pronunciara sobre la competencia, lo que hizo en sentido de continuar este Juzgado conociendo y se solicitó se remitiera nueva comisión rogatoria, dando traslado de dicha solicitud a las acusaciones a fin de que se pronunciaran sobre la competencia y las diligencias solicitadas por el Ministerio Público.

SEGUNDO.- En fecha 4 de octubre pasado se recibió escrito en este Juzgado por la representación procesal de D. JAIME IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ solicitando se le tuviera por parte para el ejercicio del derecho de defensa, dándole vista de todo lo actuado; se

dio traslado al Ministerio Público que presentó escrito oponiéndose. Habiéndose recibido en este juzgado en misma fecha anterior escrito presentados por el Procurador Sr. MAYOR MOYA, en nombre de COAST INVESTORS LLC han pasado a mi disposición las actuaciones para proceder al dictado de la resolución procedente.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Con carácter previo se ha de decir que, primero, ante los planteamientos hechos en nombre de COAST INVESTORS LLC de que se aclare su situación en las presentes diligencias, dicha cuestión no puede aclararse antes de investigar la participación que dicha entidad ha podido tener (sobre todo en el año 2008) y que fue informada por el Ministerio Fiscal diciendo que a dicha fecha una sociedad no podía ser objeto de imputación con el Código Penal en vigor; no obstante con posterioridad se han producido otros hechos en los que dicha entidad tuvo que intervenir cual es el alquiler de la vivienda a que nos referimos y que estuvo vigente hasta diciembre de 2012, en que se produjo la venta a Doña LOURDES CAVERO MESTRE y D. JAIME IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, anteriores arrendatarios desde el año 2008 hasta la compra del inmueble, cuando ya se encontraba en vigor el nuevo Código Penal, en que puede ser perfectamente imputable la entidad citada.

En segundo lugar, verdaderamente se puede correr el riesgo de producirse indefensión a los citados Sra. Caveró y Sr. González ante las informaciones producidas por los medios de comunicación; sin embargo se ha querido practicar unas primeras diligencias antes de proceder a su imputación. Primeras diligencias que, dados los medios existentes para proceder a practicarlas inmediatamente, con la dificultad adicional que supone la cooperación jurídica internacional, únicamente ha sido posible la práctica de las que se han acordado en el territorio nacional. Se debe pues tener como imputados y partes a COAST INVESTOR LLC y Doña LOURDES CAVERO MESTRE; no obstante, la condición de imputado de D. JAIME IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ no se la puede atribuir la instructora, al carecer de competencia, pese a darle traslado de las actuaciones con el fin de evitar indefensión y de que pueda instar lo que a su derecho interese, pese al informe desfavorable del Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- A la vista de los hechos denunciados, tanto al inicio como en las distintas ampliaciones e investigaciones, donde se hace alusión, además de a un supuesto delito contra la Hacienda Pública, a un supuesto delito de blanqueo de capitales, provenientes de unas supuestas comisiones, producido con anuencia de una entidad extranjera "ad hoc", con una estructura organizada y para cuya comisión se ha podido emplear una organización también "ad hoc" cuales son sociedades fiduciarias opacas, que pueden ser legales en el país donde tienen su sede pero que pueden servir expresamente para la comisión del citado delito, cuya comisión se ha materializado en distintas Audiencias provinciales (como se deduce de los hechos acumulados a instancia del Ministerio Fiscal, que parece ser que, de ser ciertos, se producen en la Comunidad de Madrid) además de en la de este juzgado, y que además se han podido producir en el extranjero y produciendo repercusión en la economía nacional, entiende la proveyente que su instrucción no le corresponde, de acuerdo con lo previsto en el artículo 89.3 en relación con el 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con independencia de que se produzca o no imputación a una

persona, D. JAIME IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, que pudiera encontrarse aforada por el hecho de ostentar la condición de Presidente de la Comunidad de Madrid (artículo 11.6 del Estatuto de autonomía de dicha Comunidad) en que la competencia correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo es opinión de la instructora que la competencia corresponde al Juzgado Central de Instrucción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio de la cuestión de la competencia entre estas dos sedes que se pueda plantear con posterioridad a la posible imputación de la persona que se ha citado como aforada y a lo que es ajena la presente instructora.

En atención a lo expuesto

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda:

1.- Tener por personados y parte imputada a INVESTOR LLC, dando traslado de las actuaciones, y asimismo se atribuye la condición de imputada a Doña LOURDES CAVERO MESTRE y se tiene por personado a D. JAIME IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, dándole traslado de las actuaciones al procurador que le representa Sr. GARRIDO FRANQUELO.

Asimismo se acuerda la inhibición a favor del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN que corresponda por turno de reparto, dejando testimonio en este juzgado, hasta tanto se acepte dicha inhibición.

PÓNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PARTES , previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS y subsidiariamente con el anterior o por separado RECURSO DE APELACION en el plazo de CINCO DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D. MARIANA PEREGRINA BLANCO, MAGISTRADO/JUEZ SUSTITUTA del JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION Nº5 DE ESTEPONA y su partido.- Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.

ILUSTRE COLEGIO PROCURADORES DE MÁLAGA DELEGACIÓN DE ESTEPONA	
RECEPCIÓN	NOTIFICACIÓN
16 DIC 2013	17 DIC 2013
Artículo 151.2	I.F.C. 1/2000

"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica

15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)".

DR

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION Nº 5 - ESTEPONA

23 NOV 2013

ENTRADA - CORREO

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION Nº 5 - ESTEPONA

29 NOV 2013

ENTRADA - CORREO

EL fiscal en las Diligencias Previas que se siguen en ese Juzgado con el nº 2.081/2.012, evacuando el traslado conferido mediante providencia de 15 de noviembre de 2.013, remitida por fax a esta Fiscalía, comparece y DICE:

Que instruido en la petición formula la representación procesal de D. Ignacio González González relativa a que se le tenga por personado en la causa al objeto de que se le permita " *ejercer su derecho a la defensa*", SE OPONE a lo interesado, puesto que la investigación seguida en esa causa lo que pretende acreditar, ante la existencia de una estructura societaria ciertamente opaca, es quien o quienes sean las personas físicas que sean los dueños de la referida entidad, y por ende, de los inmuebles que la misma adquirió en la localidad de Estepona (Málaga), extremo que es el presupuesto lógico, y necesario, de una posterior imputación.

Como es sabido en la fecha en que se produce la inversión de la entidad COAST INVESTORS LLC en España- año 2.008- , que es cuando se adquieren por dicha entidad los inmuebles en cuestión- todavía no se contemplaba en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que dicha previsión se introduce en nuestra legislación penal con la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2.010, de 22 de junio(B.O.E. nº 152 de 23 de junio), dando lugar al artículo 31 bis.

Es por ello que la investigación deba centrarse en esas personas físicas que sean las titulares reales de la inversión referida.

De lo dicho se desprende que no se ha acometido una investigación prospectiva, pues esta muy definido el objeto de la misma.

La admisión a trámite de la denuncia formulada en su día por el Sindicato Unificado de Policía, no supone, como parece entender el solicitante, que el Juzgado tenga por ciertos los hechos expuestos en la misma, pues si se ha iniciado la investigación judicial es para verificar la realidad de los mismos y su certeza, de conformidad con lo establecido en el artº 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artº 758 de la dicho Código Procesal.

Hasta tanto eso no ocurra, en puridad procesal, el Sr. González no puede ser tenido como imputado en esta causa, pues, en el momento presente, no consta que tenga relación alguna con la entidad COAST INVESTORS LLC, cuya inversión en España es el objeto de la investigación.

La personación pretendida por el Sr. González, dado su tenor literal- para " *ejercer su derecho de defensa*"- es en calidad de imputado, puesto que en nuestro sistema procesal y a diferencia de lo que ocurre en otros países (el " *arguido*" del derecho portugués) dicha condición es el punto de partida para defenderse en el proceso penal(artº 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .

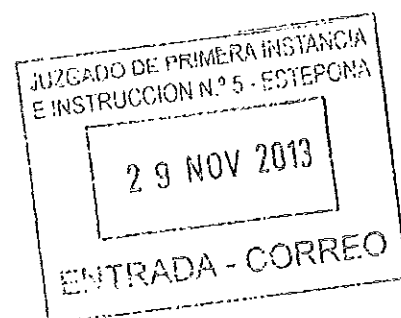
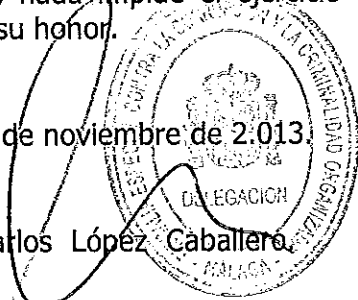
No cabe, pues, una personación preventiva de una futura e hipotética imputación.

Por otro lado, su personación como imputado en la causa está vetada dada la condición de persona aforada, a tenor de lo dispuesto en el artº 25 de la Ley Orgánica 3/1.983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, careciendo el Juzgado que conoce del presente procedimiento de competencia para dictar un Auto inculpativo contra dicho señor(Artº 57 de la Ley Orgánica 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

En cuanto a la apreciación del solicitante relativa a la falsedad de los hechos denunciados, nada impide el ejercicio de las acciones que estime pertinentes en defensa de su honor.

Málaga a 25 de noviembre de 2013.

Fdo: Juan Carlos López Caballero.



AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 5 DE ESTEPONA

DON LUIS MAYOR MOYA, Procurador de los Tribunales, en representación de la mercantil COAST INVESTORS LLC, en el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Dil. Previas n° 2.081/2012) según tiene debidamente acreditado en los autos de referencia, ante el Juzgado se persona y como en Derecho mejor proceda

DICE:

PRIMERO.- Mi representada, COAST INVESTORS LLC., propietaria y arrendadora hasta la fecha de su venta el día 18 de diciembre de 2012 del Ático n° 11 del bloque 11 de la Fase III del complejo Residencia "Alhambra del Golf" de Estepona, aparece señalada como posible responsable de los hechos objeto del escrito de denuncia presentado por el SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA (SUP) ante el decanato de los Juzgados de Estepona el día 22 de octubre de 2012, así como en los oficios remitidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal a la Fiscalía contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada, y en los diversos escritos de la Fiscalía.

Como consecuencia de la citada denuncia, el día 25 de octubre de 2012 el Juzgado de Instrucción n° 5 de Estepona dictó auto incoando Diligencias Previas.

Con fecha de 21 de Febrero de 2013 el Ministerio Fiscal insta la declaración de D. Rudy Valner como representante legal de la mercantil COAST INVESTORS LLC, lo que acuerda el Juzgado por medio de providencia de 26 de Febrero de 2013 para que tenga lugar el día 24 de mayo de 2013.

SEGUNDO.-

1º.- Mi representada tuvo conocimiento de la existencia de dicho procedimiento a través de la prensa, motivo por el cual en fecha 28 de febrero de 2013 se personó en las Diligencias Previas de referencia, al tiempo que solicitaba el sobreseimiento y archivo de las mismas. Por providencia de 18 de marzo de 2013 (documento n° 1) se nos tuvo por personados y parte en las presentes actuaciones en representación de nuestra mandante COAST INVESTORS.

Por medio de Auto de 16 de Abril de 2013, a la vista y en consonancia con el Escrito del Ministerio Fiscal de 2 de Abril, el Juzgado nos comunica (teniéndosenos por tal parte en estos autos claramente) que: *"no ha lugar de momento al sobreseimiento solicitado por COAST*

INVESTORS LLC", concediéndosenos un plazo de tres días para Apelar dicha resolución (Documento n° 2).

En los diversos y extensos escritos del Ministerio Fiscal sobre las diferentes acusaciones y personaciones de las diversas acusaciones populares durante los meses de marzo, abril y mayo, nunca se cuestionó ni se impugnó la personación y el carácter de denunciada mi representada.

En la "*solicitud de asistencia judicial en materia penal*" acordada en estas Diligencias por la titular del Juzgado con fecha de 18 de Abril de 2013 se hace referencia a que el procedimiento se sigue "*contra COAST INVESTORS LLC como partícipe en un delito CONTRA LA HACIENDA PUBLICA ARTÍCULOS 305 Y 306 DEL CÓDIGO PENAL*", manifestando que el hecho punible es la "*COMPRA FRAUDULENTE DE INMUEBLE EN ESPAÑA A TRAVES DE SOCIEDAD FIDUCIARIA*", calificando dicha actuación como un "*DELITO CONTRA LA HACIENDA PUBLICA*"(Documento n° 3).

Por tanto, es patente que el procedimiento se dirigía contra COAST INVERSTORS por un delito fiscal, y se estaba tratando a mi representada como responsable ("*partícipe*"). Consecuencia de la personación admitida es que a partir de la providencia de 18 de marzo de 2013 y hasta la realización de la diligencia de 24 de mayo de 2013, se nos han notificado cuantas diligencias se han ido produciendo, en todas las cuales se hace mención explícita que el procedimiento se dirige contra COAST INVESTORS LLC.

Por medio de Providencia de 20 de Mayo de 2013 se nos requiere por el Juzgado en los siguientes términos: "*... requiérase a la parte denunciada a través de su representación procesal, a fin e que aporte nuevo domicilio del mismo en el plazo de diez días*" (Documento n° 4). Hacemos notar la identificación de mi representada como "parte denunciada", lo que evidencia claramente cuál es la posición procesal que el Juzgado le atribuye en estos autos.

2º.- En fecha 24 de mayo de 2013 el letrado que suscribe acudió a la sede de ese Juzgado para intervenir en la declaración testifical de DON ANTONIO YAÑEZ-BARNUEVO Y HERMOSIN, comunicándosele por parte de Su Señoría ya en su despacho, después de oír al Ministerio Fiscal, y instancias del Letrado de la acusación SUP, que este letrado no podía intervenir en la declaración "*dada la condición de testigo de COAST INVESTORS LLC y no de imputado o responsable civil*", y que la personación, y las referencias al mi representada como denunciado (o en contra de él), "*... suponía un error*".

Por parte del Órgano Jurisdiccional no se ha informado a esta parte por escrito de dicha Resolución de su Señoría, ni se ha recepcionado hasta el día de la fecha ningún tipo de

Resolución Judicial que modifique, explique o aclare la situación procesal que ostentaba formalmente esta parte desde la providencia de 18 de marzo de 2013.

La actuación del Juzgado en la citada declaración es la denegación de intervención en un acto procesal de una de las partes denunciadas, a la que como tal se ha admitido al procedimiento, calidad que mantiene cuatro meses después de tal diligencia.

Desde esa fecha esta parte ha sido excluida de toda comunicación de actos procesales, así como de aquellas actuaciones que se han celebrado.

3º.- A la vista de la imposibilidad de intervención, y el contenido de la actuación de su Señoría, con fecha 28 de mayo de 2013 esta parte realizó las siguientes alegaciones ante el Juzgado:

PRIMERO.- *Que se subsane el error material de considerar a COAST INVESTORS LLC como entidad contra la que se dirige el procedimiento como se refleja en todas las resoluciones judiciales obrantes en Autos; y en consecuencia se comunique a las Autoridades de los Estados Unidos de América y del Reino Unido , por el cauce legal correspondiente, que en relación a las comisiones rogatorias libradas el presente Procedimiento no se dirige contra COAST INVESTORS LLC tal como se refleja en concreto en la solicitada al Reino Unido de fecha 18/03/2013.*

SEGUNDO.- *Que se deje sin efecto el mandamiento librado al BANCO POPULAR ESPAÑOL para que remitan las operaciones bancarias realizadas por COAST INVESTORS LLC, toda vez que no siendo parte acusada o responsable civil se estarían conculcando los derechos más elementales por no dirigir el Procedimiento contra la misma.*

TERCERO.- *Que habiendo sido requerida esta representación procesal, mediante Providencia de fecha 20/05/2013, para que comunique el domicilio de DON RUDY VALNER, a pesar de no ser parte denunciada (como se establece en la misma providencia) viene a comunicar a ese juzgado, que el domicilio para su citación le consta es:*

421 North Beverly Drive. Suite 300

90210 Beverly Hills, California.

Estados Unidos de América

La pretensión era lógica y fundamentada, puesto que si se había admitido la personación de mi representada en calidad de denunciada, y posteriormente se le comunicaba en el mismo acto de la declaración que no era tal, y se le impedía participar en los actos procesales, debían de anularse todas las diligencias procesales fundamentadas en su tal carácter de denunciada.

4º.- Por Providencia de 6 de junio del año en curso se dio traslado al Ministerio Fiscal de nuestro escrito de 28 de mayo de 2013. Es de señalar que en dicha providencia ya no aparece mi representada como parte contra la que se dirige el procedimiento (**Documento nº 4**). Lo que no supone que haya dejado de tener el carácter con que desde el inicio de estas actuaciones se le ha atribuido, pues el Juzgado en modo alguno se ha pronunciado sobre su situación procesal. Simplemente ha dejado de comunicarle las sucesivas actuaciones, sin que medie una resolución del Juzgado que determine las razones para excluirle de los actos de comunicación. Esta actuación es de extraordinaria gravedad, pues mantiene a mi representada como denunciada, pero no se le permite ejercitar su Derecho de Defensa.

5º.- Con un alto grado de detalle, por medio de los diferentes medios de comunicación, y con fecha de 10 de Julio de 2013, se ha tenido conocimiento del acuerdo de remitir una Comisión Rogatoria a Estados Unidos para que el Señor Valner conteste a una serie de preguntas dado que la *"estructura societaria que envuelve este inmueble es claramente opaca"*.

Por parte de esta representación se reiteraron nuestras alegaciones, anteriormente reseñadas, al Juzgado por medio de escrito de 15 de Julio, no habiéndose dado respuesta alguna al mismo.

6º.- Asimismo, y por diferentes medios de comunicación, mi representada ha tenido amplio conocimiento de la práctica de pruebas testificales el 13 de Septiembre ante ese Juzgado, declaraciones que pueden de ser de suma importancia para mi representada y de la que no se no ha dado cuenta a mi mandante, a quien, por tanto, se ha privado injustamente de la posibilidad de intervenir en la práctica de dichas pruebas.

Nuevamente esta representación reiteró sus alegaciones y peticiones a ese Juzgado con fecha de 18 de Septiembre, no habiendo recibido tampoco respuesta alguna a nuestro escrito.

TERCERO.- Al día de la fecha el Órgano Jurisdiccional al que nos dirigimos no ha dado respuesta alguna a las peticiones efectuadas por esta representación procesal respecto a la situación procesal de COAST INVESTORS LLC, causando dicha actuación un gravísimo e irreparable daño a esta parte y a su Derecho de defensa constitucionalmente consagrado. Con las gravísimas consecuencias que dicha actuación judicial lleva incorporadas, no habiendo emanado ninguna resolución de ese órgano jurisdiccional que revoque o contradiga los anteriores autos y diligencias del mismo Juzgado, según los cuales la actuación se dirigía contra mi representada

(providencias de 18 de marzo, 7 y 22 de Mayo de 2013) y se nos tenía por parte. Es decir, en realidad COAST INVESTORS LLC sigue siendo una parte denunciada, pero se le excluye de cualquier comunicación procesal, lo que, además, le impide hacer valer sus derechos en el procedimiento al punto que de enterarse del devenir procesal por los medios de comunicación.

CUARTO.- La denuncia que inicia estas actuaciones ingresa al Decanato de los Juzgados de Estepona el día 22 de octubre de 2012, y en ella se indican como hechos los siguientes:

- a) que la compraventa del inmueble se realizó mediante escritura otorgada en 2008 ante el notario de Estepona Sr. Bayón;
- b) que dicha compraventa no consta inscrita al Registro de la Propiedad de Estepona, y
- c) que no se había informado de tal movimiento de capital al Banco de España.

Con fecha 12 de diciembre el Ministerio Fiscal aporta diversa documentación que acredita que la compraventa no se ha escriturado ante el Notario que se indicaba en la denuncia, y que en la misma se acompaña el impreso D-2, de declaración de inversión extranjera en bienes inmuebles al Ministerio de Economía. El siguiente 22 diciembre por el Ministerio se solicita la práctica de diligencias de prueba y se acompañaba documentación adicional. Incluida en ella una resolución de archivo de una denuncia por los mismos hechos que los consignados en la que inicia de esos autos.

A la vista de la documentación aportada por la Fiscalía, se acordó el 9 de enero de 2013 una de las diligencias propuestas, recabar información de la Agencia Tributaria. Llegada dicha documentación a los autos, queda acreditado que, en efecto, el inmueble había sido adquirido por mi representada, que ésta lo había, efectivamente, arrendado y que con anterioridad al día 22 de octubre de 2012 estaba al corriente de pago de sus obligaciones tributarias.

El lugar de comprobar el último de los hechos denunciados, la ocultación de la operación frente a terceros, mediante la falta de inscripción de la compraventa en el Registro de la Propiedad de Estepona, la instrucción sigue otros derroteros, sin que hasta que se incorpore a los autos la escritura por medio de la cual mi representada vende el inmueble a sus arrendatarios se haga diligencia alguna para averiguar si la omisión de la inscripción era cierto no. De la lectura de esta última escritura se evidencia que tampoco la omisión de inscripción a la fecha de presentación de la denuncia era cierta, pues su adquisición fue inscrita en fecha anterior.

En resumen, la denuncia está fundamentada en tres afirmaciones ninguna de las cuales es cierta la fecha de presentación de la misma. Es más, la propia documentación remitida por la

Agencia Tributaria acredita la regularidad de todas las operaciones que para las denunciadas tenían un hábito de sospecha. Momento partir del cual debe estimarse que el delito fiscal, que es la conducta delictiva por la que se instruyen las diligencias en las que mi representada es denunciada, no existía en modo alguno. Lo que debió de conducir ya en aquel momento al sobreseimiento y archivo definitivo.

En lugar de ello, se emprende una instrucción que tras once meses desde su inicio sigue, prácticamente, en el mismo punto en que se encontraba. Al extremo de que a día de hoy no es posible sostener con un mínimo de rigor la existencia del delito contra la Hacienda Pública que justificó la apertura de diligencias, desde el momento en que se acredita y consta que todos los Impuestos derivados de la compra y venta del inmueble fueron liquidados, y que la cuantía de los mismos no supera el límite objetivo del delito imputado. En definitiva, que la causa se sostiene, única y exclusivamente, en recortes de prensa.

Es más, ocurrido los hechos que se presumen defraudatorios con anterioridad al día 1 de junio de 2008, a la fecha presente, 3 de octubre de 2013, la posible defraudación fiscal estaría prescrita tanto desde el punto de vista administrativo como del penal. Y que nunca lo fueron, pues como consta en autos, se cumplieron todas las formalidades antes de presentarse la denuncia que da origen a este procedimiento.

Además, pese a que son ya muchos meses de investigación, nos encontramos con que no existe imputación formal contra persona alguna. Entre otras razones porque la compraventa se llevó a cabo mediante pagos perfectamente declarados, la escritura de adquisición refleja los acuerdos entre las partes y el adquirente es una sociedad de nacionalidad norteamericana, constituida y domiciliada en uno de los estados federales que, de acuerdo con la legislación española, no tiene el carácter de paraíso fiscal por mucho que se haya repetido tal mentira.

QUINTO.- Nuevamente, y por diferentes medios de comunicación se ha conocido la existencia, y suponemos que remisión al Juzgado, de un informe del Ministerio Fiscal de 700 páginas, resultante de la denuncia de un sindicato de Trabajadores o Afectados de Telemadrid.

Ante esta información a la que, insistimos, al contrario que mi representada, los medios de comunicación tienen acceso libre y directo, este Letrado se pone en contacto telefónico en fecha de 26 de Septiembre con el Juzgado, reiterándonos la funcionaria que tiene instrucciones de no proporcionarle información al respecto a esta parte, indicando tan sólo que de tales aspectos se ha dado traslado al Ministerio Fiscal con fecha de 17 de Septiembre.

La nueva denuncia, según las informaciones periodísticas a que nos referimos, nos sitúa curiosamente en un nuevo escenario. Ya no se trata, como denunció el SUP, de una defraudación fiscal, que desde el mes de febrero de este año no se sostiene, sino, al parecer, de

un cohecho como consecuencia de determinadas adjudicaciones de derechos televisivos de Telemadrid. Es decir, como la denuncia inicial presenta signos de agotamiento, se pretende sustituirla dotándole de un antecedente que impida que se agote el oxígeno procesal. Y todo ello sin que en ningún momento mi representada, que sigue siendo denunciada, pues no hay resolución del Juzgado que acuerde su cambio de status procesal, pueda acceder a la instrucción ni ejercitar su Derecho de Defensa.

SEXTO.- Los antecedentes señalados tienen particular relevancia a la hora de valorar la pertinencia, no sólo de las diligencias de investigación que se vienen practicando y que vulneran flagrantemente los derechos de defensa de mi representada y de otros, sino de la atípica e ilegal situación procesal de mi mandante, que pese a ser denunciada y mantenerse su situación como tal, se le impide el acceso a la instrucción, para con esta artera maniobra poder instruir sin oposición o participación alguna de mi principal, conculcando sus más elementales derechos de defensa.

El objeto de la investigación sumarial, y también de la que se practique en unas diligencias previas, ha de ser el esclarecimiento de hechos delictivos, no el de hechos en abstracto, genéricos e indefinidos en cuanto a su valoración jurídica, que no pueden por tanto revestir los caracteres de delito, solicitando diligencias y diligencias hasta poder encontrar de que se acusa a los posibles imputados. Así se deduce de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulan la investigación que debe realizar el juez instructor – artículos 299, 301, 312, 733, 777, 779, etc-. La omisión de tal objeto, y, además, la admisión de la nueva denuncia, dota a la instrucción del carácter de causa general que deslegitima su propio objeto.

Por lo anterior,

AL JUZGADO SUPlico que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por hechas las alegaciones que en él se contienen, y por denunciada la vulneración de los derechos constitucionales de mi principal a los fines que prevé el artículo 44 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional. y por tanto tramite y, en su consecuencia acuerde:

- a) dictar resolución por medio de la cual determine cuál es el status o posición jurídico-procesal de COAST INVESTORS en la presente causa;
- b) en el supuesto de que dicho status sea el de denunciada, acuerde darle vista de lo actuado desde el día 23 de mayo de 2013, al objeto de que inste lo que a su derecho convenga;
- c) y en el supuesto de que tal status no sea el de denunciada

c.1) determinar desde qué fecha no tiene tal situación, y en base a qué fundamentos fácticos y jurídicos, fundamentar debidamente las razones para revocar su previo pronunciamiento de considerar que COAST INVESTORS no es denunciada desde la fecha que proceda;

c.2) que se declare la nulidad de la comisión rogatoria dirigida a Lloyds Bank, de Londres y, en consecuencia, se haga la correspondiente comunicación a las autoridades del Reino Unido; y, caso de haberse cumplimentado la misma, se declare la nulidad absoluta y radical de dicha actuación motivada por haber tramitado la misma por considerarse a mi representada denunciada en estos autos, cuando no existía causa contra ella;

c.3) que se deje sin efecto el mandamiento librado al BANCO POPULAR ESPAÑOL para que remitan las operaciones bancarias realizadas por COAST INVESTORS LLC, toda vez que no siendo parte acusada o responsable civil se estarían conculcando los derechos más elementales por no dirigir el Procedimiento contra la misma; y en el supuesto de que se haya cumplimentado se declare la nulidad absoluta y radical de dicha actuación motivada por haber tramitado la misma por considerarse a mi representada posible responsable de una actuación fraudulenta, cuando no existía causa contra ella.

Por ser de justicia que pido en Estepona a 24 de octubre de 2013

ESTEPONA

Teléfono: 951891354/951891353. Fax: 951891356.

Procedimiento: DIL.PREVIAS 2081/2012. Negociado: AN

De: SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA (S.U.P)

Procurador/a: PILAR TATO VELASCO

Letrado/a: FRANCISCO JAVIER CARNERERO PARRA

Contra: COAST INVESTORS LLC

Procurador/a: MAYOR MOYA LUIS

Letrado/a: JOSE MANUEL HIDALGO LOPEZ-PASTOR

PROVIDENCIA DEL/DE LA JUEZ D./DÑA. MARIANA PEREGRINA BLANCO

En ESTEPONA, a dieciocho de marzo de dos mil trece.

Dada cuenta; por recibido el anterior escrito de proposición de pruebas presentado por la **PROCURADORA Dª PILAR TATO VELASCO**, procédase, conforme a lo solicitado:

-A librar Comisión Rogatoria (que previamente deberá ser remitido al Gabinete de Interpretes adscrito este Juzgado para que procedan a su traducción al inglés) al Banco 10560 LLOYDS TSB BANK PLC de Londres, a fin de que se nos informe sobre el último beneficiario de las cuenta corriente que obre a nombre de "Coast Investors LLC", titulares o autorizados de la misma, así como de sus movimientos contables de origen o destino a España, con indicación de las cuentas o destinatarios.

-A oficiar al Centro Operativo de Extranjero del Banco Popular a fin de que remitan todas las operaciones que consten en realizadas por Coast Investors LLC y Rudy Valner Sod.

Se tiene por recibido escrito presentado por el **PROCURADOR D. LUIS MAYOR MOYA**, teniéndosele por personado en las presentes actuaciones en nombre y representación de la cia. Coast Investors LLC, bajo la dirección letrada de **D. JOSE MANUEL HIDALGO LOPEZ-PASTOR**, y en lo relativo a la petición de sobreseimiento verificada, dése traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre lo interesado.

Se tiene por recibido escrito de personación presentado por la **PROCURADORA Dª ROCIO TORRES MONTOYA**, dándose traslado del mismo al Ministerio Fiscal a fin de que se pronuncie sobre la acusación particular que se pretende ejercitar, y en su caso, caución a prestar.

Finalmente, se tiene por recibida la escritura de compraventa que fue requerida del Órgano Centralizado de prevención del blanqueo del Consejo General del Notariado, quedando incorporada a las actuaciones.

Lo manda y firma S.Sª., doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado.

ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS DE MÁLAGA DELEGACIÓN DE ESTEPONA	
RECIBIÓ	NOTIFICACIÓN
Doy fe.- 20 MAR 2013	21 MAR 2013
Artículo 151.2	L.E.C. 1/2000

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION Nº5 DE ESTEPONA

AVENIDA PUERTA DEL MAR, 45

Teléfono: 951891354/951891353. Fax: 951891356.

Procedimiento: DIL.PREVIAS 2081/2012. Negociado: AN

N.I.G.: 2905143P20120002461.

De: SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA (S.U.P)

Procurador/a: PILAR TATO VELASCO

Letrado/a: FRANCISCO JAVIER CARNERERO PARRA

Contra: COAST INVESTORS LLC

Procurador/a: MAYOR MOYA LUIS

Letrado/a: JOSE MANUEL HIDALGO LOPEZ-PASTOR

AUTO

En ESTEPONA a dieciséis de abril de dos mil trece.

HECHOS

PRIMERO.- En este juzgado se siguen diligencias iniciadas mediante denuncia presentada en nombre de SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA (S.U.P.) por un supuesto delito contra la Hacienda Pública habiéndose practicado diligencias de investigación que se consideraron necesarias a instancia del Ministerio Fiscal o mediante iniciativa de la proveyente.

SEGUNDO.- En fecha 18 de marzo de 2013 tuvo entrada escrito por la Procuradora Doña Rocío Torres Montoya en nombre de D. José Quintana Viar, D. José Manuel Franco Pardo, Doña María Amparo Valcarlos García y Doña Rosa María Alcalá Chacón, diputados del grupo parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, interesando el ejercicio de la acción popular en las presentes diligencias, solicitándose asimismo en escrito que tuvo entrada el 18 de marzo de 2013 en nombre de COAST INVESTORS LLC el sobreseimiento de las actuaciones, que, remitido al Ministerio Fiscal a fin de que se pronuncie sobre la acusación particular que se pretende ejercitar, y en su caso, caución a prestar, fue devuelto en el día de ayer cumplimentado, quedando a mi disposición las actuaciones para el dictado de la resolución procedente.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Pese al contenido extenso del escrito del Ministerio Público, el pronunciamiento que se hace de sometimiento de ejercicio de la acción penal (de la popular) a las exigencias de querella y prestación de fianza, con matizaciones a un proceso en curso, es algo difuso. El artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que la acción penal es pública y que todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla condiciona sin embargo a que se haga con arreglo a las prescripciones de la Ley; dichas prescripciones no son otras que

las que describe el artículo 280: *El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio.* La jurisprudencia contemporánea es la que mejor se adecua a las exigencias del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, por lo que, en este extremo, no debiera ser revisada. Y así, en lo que a la legitimación de las personas jurídicas se refiere, no cabe olvidar que algunas de ellas son portadoras de «intereses difusos» (v. gr. los sindicatos para la persecución del delito social, las asociaciones de derechos humanos para la del delito de tortura, las ecologistas o de consumidores para la de delitos ecológicos o contra la salud pública, los grupos feministas para la de los delitos contra la libertad sexual, etc.), que han de merecer el calificativo de legítimos a la luz del artículo 24 de la Constitución. No podemos sin embargo olvidar la proliferación de denuncias "políticas" en estos últimos años, la inmensa mayoría de las cuales están condenadas, por infundadas, al más absoluto de los fracasos. Lo que no se puede tolerar es el traslado de la lucha electoral a los juzgados y la utilización del proceso penal para fines políticos, como pueden ser la obtención de información reservada de los partidos políticos adversos, al amparo de la publicidad que, para las partes reporta; la neutralización política de determinados cargos públicos que, aun cuando pudieran beneficiarse en el futuro de una sentencia absolutoria, sufren un juicio social anticipado (y estimulado por los medios de comunicación social) de culpabilidad, de consecuencias irreparables para su fama, y, en general, el sacrificio del derecho de defensa, para políticos y no políticos, que tales "inquisiciones generales" siempre reportan.

SEGUNDO.- En el caso que nos ocupa la denuncia inicial fue difusa e inconcreta, no dirigida contra nadie conteniendo una serie de insinuaciones (que no acusaciones). Se remitió al Ministerio Fiscal que tampoco concretó la comisión de delito contra nadie instando la práctica de diligencias. La instructora ha ordenado la práctica de las diligencias interesadas por el mismo y algunas solicitadas por la organización sindical denunciante a fin de poder determinar la existencia de ilícito penal y sus autores. Siendo claras las matizaciones del Ministerio Público en cuanto a la posibilidad de personación en la causa sin formular querrela una vez iniciada la causa, no lo es tanto la no prestación de fianza, tanto por los motivos expuestos, como por la influencia en la imparcialidad de la instrucción que puede tener el hecho de la personación tanto de un sindicato policial como de representantes de un partido político, pese a que no se puede negar su acceso. Claro que el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal proclama que la acción penal es pública; pero se ha de ejercer en la forma que marca la Ley, que no puede ser otra que prestando caución, aunque se exima de la forma de querrela, al estar constituido en parte el Ministerio Público. Es por ello que no debe tenerse por parte a D. José Quintana Viar, D. José Manuel Franco Pardo, Doña María Amparo Valcarce García y Doña Rosa María Alcalá Chacón como acusación popular sin previa prestación de fianza. No teniendo la condición de perjudicado, tampoco se puede tener como acusación particular a SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA (S.U.P), pudiendo tener la condición de acusación popular si previamente presta fianza que se dirá en la parte dispositiva.

PARTE DISPOSITIVA

No tener por personados y partes como acusación popular a D. José Quintana Viar, D. José Manuel Franco Pardo, Doña María Amparo Valcarce García y Doña Rosa María Alcalá


Chacón, si previamente no prestan fianza de 6.000 euros. Asimismo no tener por personado y parte a SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA (S.U.P), si previamente no presta fianza de 6.000 euros.

No ha lugar de momento al sobreseimiento solicitado por la entidad COAST INVESTORS LLC.

PONGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PARTES PERSONADAS, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, **RECURSO DE APELACION** en el plazo de **TRES DIAS**.

Así lo acuerda, manda y firma D. MARIANA PEREGRINA BLANCO, MAGISTRADO/JUEZ del JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION Nº5 DE ESTEPONA y su partido.- Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fé.

 LEYRE COLLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA DELEGACIÓN DE ESTEPONA	
RECEPCIÓN	NOTIFICACIÓN
17 ABR 2013	18 ABR 2013
Artículo 151.2	L.E.C. 1/2000

"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)".



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
DELEGACIÓN DE MÁLAGA

RECEIVED
FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
DELEGACIÓN DE MÁLAGA
- 4 APR 2013

AL JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 5 DE ESTEPONA

EL Fiscal en las Diligencias Previas que se siguen en ese Juzgado con el nº 2.081/2.012, evacuando el traslado conferido mediante providencia de 18 de marzo de 2.013, con entrada en esta oficina el día 1 de abril, comparece y DICE:

1º.- Que en lo que a la petición de sobreseimiento de las actuaciones que hace la representación procesal de la entidad COAST INVESTORS LLC se refiere SE OPONE a la misma al estimar que dicha petición resulta prematura hasta tanto no concluya la Investigación de los hechos, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en el momento procesal oportuno(artº 779 de la LECRM).

Los hechos objeto de la investigación giran en torno a las circunstancias en virtud de las cuales la entidad COAST INVESTORS LLC adquiere, mediante escritura pública de 12 de mayo de 2.008, ciertos inmuebles (una vivienda, tres garajes y tres trasteros) en el edificio sito en la Urbanización Alhambra del Golf, fase III, Bloque 11, planta 2 de Estepona (Málaga), por un precio de 750.000 euros, siendo una entidad de la que se desconoce su actividad mercantil, su capacidad económica y quien pueda ser su último beneficiario o titular.

Para aclarar, ente otros, estos extremos, se ha interesado la declaración judicial de D. Rudy VALNER, representante legal de dicha entidad, así como de D. Antonio YAÑEZ-BARNUEVO HERMOSIN, que figura como la persona que actuó como representante de la entidad COAST INVESTORS LLC ante la AEAT (Folio 343 a 345 del TOMO II), para la obtención del NIF de la misma, diligencia que ha sido acordada por el Juzgado, estando prevista su realización para fecha próxima.(Folio 402 del TOMO II)

2º.- En cuanto a la personación que solicitan los Srs D. José Quintana Viar, D. José Manuel Franco Pardo, Dª María Amparo Valcarce García, y Dª Rosa María Alcalá Chacón, Diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, en concepto de ACUSACION POPULAR, no se opone a ello, debiendo ajustarse la misma al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en particular, formulando querella-artº 270 de la LECRM- y prestando fianza - artº 280 de la citada ley -.

Ahora bien, al estar ya el procedimiento incoado, el requisito relativo a la formulación de querella puede ser matizado de acuerdo con la tesis establecida en las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 12 de marzo de 1992, 3 de junio de 1995 y 4 de junio de 1997, que permiten prescindir de dicho requisito al acusador popular una vez ya incoado el procedimiento penal, si bien que en tal caso su



FISCALÍA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
DELEGACIÓN DE MÁLAGA

posición procesal tenga el carácter de una simple intervención meramente adhesiva a la acusación ya ejercitada por otras partes.

A este respecto señala la STS 8255/2.006, de 20 de diciembre de 2.006, dictada en el Recurso nº 626/2.006, con Ponencia del Excmo. Sr. D Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, en su Fundamento de Derecho Octavo, que

"...esta Sala viene manteniendo (SSTS. 18.3.92, 22.5.93, 3.6.95, 4.2.97), que el legislador, tratándose de delito público, no ha limitado la acción popular al derecho de pedir la incoación del proceso penal mediante querella y fianza, sino que ha permitido ejercitarla en las causas ya iniciadas personándose en los términos prevenidos en el art. 110 LECriminal, es decir, mostrándose parte como adhesión en nombre de la ciudadanía a un proceso pendiente, sin dejar condicionada la eficacia de la acción penal a la formulación de querella...."

Y añade

"La existencia de fianza, impuesta por el art. 280 , constituye requisito de admisibilidad de la querella cuando ésta es medio de iniciación del proceso penal, pero cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en un proceso en curso la necesidad de tal requisito no parece razonable".

OTROSI DICE: En la causa se ha interesado la práctica de determinadas diligencias de prueba - folios 410 y 413 del TOMO II-, alguna de ellas asumidas por su Señoría, por parte de la representación procesal del Sindicato Unificado de Policía, entidad que fue la que denunció en su día los hechos ahora investigados.

Sin embargo no consta que dicho Sindicato esté personado en la presente causa, pues no se ha resuelto expresamente sobre ese extremo, ni se ha determinado el concepto en el que se halla en el presente procedimiento.

Sobre este último extremo el Fiscal entiende que su personación en la causa, de admitirse, debe ser a título de acusación popular, pues la naturaleza de los delitos objeto de investigación - Delito contra la Hacienda pública(artº 305 Cp) y/o delito de blanqueo de capitales(artº 301 Cp) - no permite hablar en puridad de que alguna persona o grupo determinado de ellas sean los ofendidos o perjudicados por el delito, pues estamos ante delitos cuyo bien jurídico tutelado es de titularidad general o colectiva.

El referido Sindicato no ostentan la condición de ser " ofendido " o "perjudicado " por el delito (artº 761.2º de la LECRM), que son los supuestos en que, en el Procedimiento Abreviado, quedan exceptuados de la necesidad de presentar querella para ejercitar la acción penal y ser parte en el proceso.



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
DELEGACIÓN DE MÁLAGA

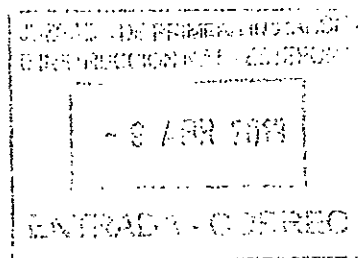
En efecto según el Tribunal Supremo, " ofendido " es un término dotado de significación jurídica propia, que se identifica con el titular del bien jurídico protegido, es decir con el sujeto pasivo del delito: Tratándose de la imputación de unos presuntos delitos cuyo bien jurídico protegido es de carácter general, siendo su titular la sociedad en su conjunto o el propio Estado, no concurre tal cualidad en dichos señores.

Por " perjudicado " se entiende quien sufre directamente las consecuencias dañosas del delito cometido, sin ser titular del bien jurídico, lo que como es obvio tampoco se da en el Sindicato antes aludido.

En consecuencia, el ejercicio de la acción penal se somete a las exigencias de la querrela y la prestación de la fianza a que ya se ha hecho alusión, con las matizaciones, sobre esos requisitos, referidas a un procedimiento en curso.

Málaga a 2 de abril de 2.013.

Fdo: Juan Carlos López Caballero.



**SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL****VÍA DE TRANSMISIÓN: MINISTERIO DE JUSTICIA****La solicitud debe remitirse por VÍA DIPLOMÁTICA**

Por este escrito se dirige a la Autoridad competente de REINO UNIDO solicitud de asistencia judicial en materia penal con origen en DILIGENCIAS PREVIAS N° 2018/2012 que se sigue en JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 5 DE ESTEPONA (MÁLAGA) contra COAST INVESTORS LLC como partícipe de un delito de CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA ARTÍCULO 305 Y 306 DEL CÓDIGO PENAL, al amparo de lo dispuesto en:

CONVENIO DE ASISTENCIA PENAL ENTRE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 29 DE MAYO DE 2000

AUTORIDAD SOLICITANTE

Estado requiriente:	El Reino de España
Autoridad:	MARIANA PEREGRINA BLANCO
Órgano:	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 5 DE ESTEPONA (MÁLAGA)
Sede del Órgano:	AVENIDA PUERTA DEL MAR N° 45
N° teléfono:	951891354
N° fax:	951891356
Dirección de e-mail:	
Idiomas que habla:	
Referencia y n° de procedimiento:	DILIGENCIAS PREVIAS N°2081/2012

HECHOS PUNIBLES

COMPRA FRAUDULENTE DE INMUEBLE EN ESPAÑA A TRAVÉS DE SOCIEDAD FIDUCIARIA

CALIFICACIÓN JURÍDICA

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

ENCONTRARSE LA SEDE DE LA ENTIDAD BANCARIA EN ESE PAÍS

ACTIVIDAD(ES) SOLICITADA(S)

- OTRAS DILIGENCIAS
OFICIOS A LA ENTIDAD BANCARIA QUE CONSTA EN LA PROVIDENCIA CUYA COPIA SE ADJUNTA

URGENCIA / FECHA LÍMITE

SIN DILACIÓN

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACUERDAN LAS DILIGENCIAS

EN CASO DE REQUERIR EL CONVENIO TRADUCCIÓN DE LA SOLICITUD Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

☐ Se adjunta traducción oficial de la solicitud y de la documentación adjunta, certificada por el intérprete, firmada y sellada.

ACUSE DE RECIBO (a devolver cumplimentado al recibir la solicitud para facilitar contactos futuros)

☐ EMAIL ☐ FAX ☐ CORREO ORDINARIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL EMISORA

Magistrado-Juez/Secretario/Fiscal:

MARIANA PEREGRINA BLANCO

Órgano:

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE ESTEPONA (MÁLAGA)

Sede del Órgano:

AVDA. PUERTA DEL MAR 45

Fecha:

18/03/2012

11

12

13

14

Doc 4

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION Nº5 DE ESTEPONA

VENIDA PUERTA DEL MAR, 45
Teléfono: 951891354/951891353. Fax: 951891356.
Ejecutoria nº: . Negociado: AN
Procedimiento: DIL PREVIAS 2081/2012
ILG.: 2905143P20120002461
De: SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA (S.U.P)
Procurador/a: PILAR TATO VELASCO
Letrado/a: FRANCISCO JAVIER CARNERERO PARRA
Contra: COAST INVESTORS LLC
Procurador/a: MAYOR MOYA LUIS
Letrado/a: JOSE MANUEL HIDALGO LOPEZ-PASTOR

PROVIDENCIA DEL/DE LA JUEZ D./DÑA. MARIANA PEREGRINA BLANCO

En ESTEPONA, a veinte de mayo de dos mil trece.

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito por el que la **PROCURADORA Dª PILAR TATO VELASCO** aporta a las actuaciones copia del resguardo acreditativo del ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de la fianza requerida mediante auto de fecha 06/04/2013, teniéndose por personado al **Sindicato Unificado de Policía** como acusación popular.

Igualmente, habiéndose recibido devuelto el exhorto librado en su día a los Juzgados de Madrid, cumplimentado en lo relativo a la citación del testigo Antonio Yáñez-Barnuevo Hermosín, pero no en lo relativo a la citación del testigo Rudy Valner, por haber resultado insuficiente la dirección que del mismo consta en las actuaciones, requírase a la parte denunciada, a través de su representación procesal, a fin de que aporte nuevo domicilio del mismo en el plazo de diez días.

Lo manda y firma S.Sª, doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.-

"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)".

